

**INFORME SECRETARIAL:** Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). Al Despacho de la señora Juez el expediente **2024-10034**, informando que, una vez superado el término del traslado, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dio respuesta al requerimiento contenido efectuado, y a la fecha se encuentra para resolver la presente **ACCIÓN DE TUTELA**. Sírvase proveer.

**FABIO EMEL LOZANO BLANCO**

Secretario

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.**

Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

### **I. ANTECEDENTES**

La señora Olga Rosa Perea Chaverra, quien actúa en causa propia, interpuso acción de tutela en contra de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad y al mínimo vital.

Como sustento de lo pretendido, sostuvo que interpuso derecho de petición ante la encartada el 2 de febrero del 2024, solicitando se le diera a conocer una fecha cierta en la que podría recibir sus cartas cheques, toda vez que diligenció el formulario y la actualización de los datos correspondiente.

Agregó que la UARIV, no ha brindado una respuesta “...*ni de forma, ni de fondo...*”, a la petición deprecada, ni ha señalado una fecha cierta de cuándo va a desembolsar el monto de la indemnización por concepto de desplazamiento forzado.

Señaló que, al no darse respuesta a la petición, la UARIV no solo vulnera el derecho de petición del que es titular, sino también a la verdad, a la indemnización, a la igualdad, y todos aquellos mencionados en la sentencia T-025 de 2004. Aclaró que, en algunas de las respuestas dadas por la mencionada entidad, ha señalado que debe iniciar el Plan de Atención y Asistencia y Reparación Integral (PAARI), actividad que refiere ya haber ejecutado.

Precisó que, suscribió el formulario relativo al plan individual para reparación integral, al que adjuntó los documentos pertinentes, agregando que le manifestaron que en un mes podía cobrar la carta cheque emitida a título de indemnización como víctima de desplazamiento forzado.

De igual forma, indicó que la entidad le comunicó la aplicación de un nuevo método técnico de priorización en la primera vigencia del 2022 – 2023, lo que la someterá a una espera injustificada, sin que le señalen una fecha exacta o probable en la que se efectuará el pago correspondiente.

Atendiendo los argumentos expuestos, solicitó:

1. Se ordene a la UARIV, contestar el derecho de petición de fondo.
2. Se ordene a la UARIV, contestar la petición manifestando fecha cierta del pago de sus recursos.
3. Se dé cumplimiento a la establecido en Resolución emitida por la UARIV, y se le asigne el pago de la indemnización deprecada.
4. Se ordene a la UARIV, efectuar el estudio de priorización relativo a ella y a su grupo familiar, junto a la fijación de un término razonable y perentorio de la entrega material de la indemnización administrativa reconocida.

Como anexo de la solicitud de tutela, fue aportado:

1. Copia del derecho de petición con radicado 2024-0054055-2 - del 2 de febrero del 2024, el cual se encuentra dirigido a UARIV, suscrito por la señora Olga Rosa Perea Chaverra.

## II. TRÁMITE Y CONTESTACIÓN

A través de la providencia emitida el 5 de marzo del 2024, se admitió la presente acción de tutela y se requirió a la UARIV para que rindiera un informe detallado acerca de cada uno de los hechos y pretensiones relativos a tal acción.

En cumplimiento de los requerimientos contenidos en la providencia, la doctora **Gina Marcela Duarte Fonseca, actuado como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas – UARIV**, a través del escrito con radicado 2024-0351839-1, señaló que al verificar la información contenida en el Registro Único de Víctimas, fue posible constatar que la señora Olga Rosa Perea Chaverra, se encuentra incluida en tal instrumento, debido al hecho victimizante de desplazamiento forzado.

Adicionó que, el 2 de febrero del 2024, la accionante radicó una petición a la cual se le dio el número de radicado número 2024-0054055-2, aclarando que se le dio respuesta a través del documento 2024-0271739-1 el 24 del mismo mes y año.

En otro giro, aseguró que la parte actora interpuso acción de tutela por los mismos hechos, siendo esta tramitada por el Juzgado Quinto Administrativo Oral Del Circuito Judicial De Bogotá D.C. Sección Primera Proceso, identificada

bajo el número de radicado 11001333400520230058700.

Por otro lado, informó que el competente para dar cumplimiento a la orden se encuentra cargo de la Dirección Técnica de Reparación de la Unidad para las Víctimas, solicitando la desvinculación de la directora general de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la señora María Patricia Tobón Yagarí.

Reiteró que, dio respuesta a través del radicado número 2024-0271739-1 del 24 de febrero de 2024, así mismo, que remitió un alcance a la respuesta referenciado como Cod Lex 7894785, notificado al correo electrónico informado por la accionante [pereaolgarosa@gmail.com](mailto:pereaolgarosa@gmail.com)

En relación a la indemnización administrativa, refirió haber aplicado el Método Técnico de Priorización, con el propósito de determinar el orden de entrega de la indemnización a las víctimas de manera proporcional a los recursos presupuestales asignados en el año 2023, dando como resultado la improcedencia de la entrega de la medida de indemnización. Por tal motivo, arguyo que se aplicaría nuevamente el estudio deprecado en el transcurso del 2024, aclarando que, en ningún caso, el resultado obtenido en una vigencia será acumulado para la siguiente.

Precisó que la accionante puede adjuntar en cualquier tiempo, la certificación y los soportes necesarios para priorizar la entrega de la medida, en el caso que llegase a contar con alguna de las situaciones descritas como urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad contenidos en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 o primero de la Resolución 582 de 2021.

Hizo referencia a los esfuerzos desarrollados por el Gobierno Nacional a través de la UERIV, así como informó la proyección de los recursos necesarios para dar cumplimiento a las víctimas que se encuentran priorizadas conforme a la Resolución 1049 de 2019 y la Resolución 582 de 2021.

Por lo anterior, afirmó que no es posible dar fecha y cierta y/o pagar la indemnización administrativa, toda vez que debe ser respetado el procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 y del debido proceso administrativo. Igualmente, arguyo que la entidad no realiza la entrega de cartas cheque hasta tanto no se vaya a efectuar el pago, por tal razón no era procedente su expedición.

Para finalizar, refirió haber remitido Certificado de Inclusión en el RUV, a través de la comunicación No. 2024-0271739-1 del 24 de febrero de 2024. Por tal motivo, explicó que la respuesta emitida se ajustó a los presupuestos de que trata la Ley 1755 de 2015, así como lo definido por la jurisprudencia constitucional, toda vez que, ha resuelto de fondo las pretensiones propuestas, es congruente y fue oportuna. En ese orden de ideas, refirió que se presentó la figura jurídica de hecho superado.

Con el fin de acreditar lo expuesto, aportó:

1. Copia de la constancia de notificación del Juzgado Quinto Administrativo Oral - Sección Primera, referenciada "*RV: 2023-00587 NOTIFICACIÓN AUTO ADMITE TUTELA*" del 29 de noviembre del 2023.
2. Copia del auto admisorio de tutela del Juzgado Quinto Administrativo Oral - Sección Primera de Olga Rosa Perea contra Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas – UARIV del 28 de noviembre del 2023.
3. Copia del documento denominado "*ref: ACCION DE TUTELA*" firmado por la señora Olga Rosa Perea contra la UARIV.
4. Copia del documento "*DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR*" adiado el 24 de octubre del 2023, bajo número de radicado 2023-0634047-01, y suscrito por la señora Olga Rosa Perea.
5. Copia de la constancia de notificación del Juzgado Quinto Administrativo Oral - Sección Primera, referenciada "*RV: 2023-00587 NOTIFICACIÓN SENTENCIA TUTELA*" del 12 de diciembre del 2023.
6. Copia del fallo de tutela del Juzgado Quinto Administrativo Oral - Sección Primera fechado el 12 diciembre del 2023.
7. Copia de la Resolución No 04102019-172743 del 21 de diciembre del 2019 emitida por la Directora Técnica de Reparación para la atención y reparación integral a las víctimas, mediante el cual se reconoce la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado a la gestora.
8. Copia de documento emitido por la UARIV adiado el 25 de mayo del 2020 con radicado 201941021232631 dirigido al señor Epifanio Palma Mosquera bajo el asunto "*Notificación Personal No 172743 de 2019*"
9. Copia del documento fechado el 16 de febrero del 2024 con radicado 2024-0187895-1 con asunto "*Resultado no favorable para la entrega de la medida indemnizatoria por aplicación del Método Técnico de Priorización*" dirigido al señor Epifanio Palma Mosquera.
10. Copia del documento con radicado 2024-0271739-1 bajo el asunto "*Respuesta a derecho de petición No Radicado 2024-0054055-2 CODIGO LEX 7837365 D.I # 26260424*" adiado el 24 de febrero del 2024 dirigido a la señora Olga Rosa Perea Chaverra.
11. Copia de certificado del Registro Único de víctimas (RUV) destinado a la señora Olga Rosa Perea Chaverra con fecha 22 de febrero del 2024.
12. Copia de documento referenciado como "*alcance la respuesta del derecho de petición número 2024-0271739-1 código legal: 7894785 M.N LEY 387 DE 1997 D.I #: 26260424*" conducido a la señora Olga Rosa Perea Chaverra el 7 de marzo del 2023.

13. Copia de la constancia de envío vía correo electrónico el 7 de marzo del 2024 a la dirección [PEREAOLGAROSA@GMAIL.COM](mailto:PEREAOLGAROSA@GMAIL.COM), referenciado como "2-RESPUESTA-alcance de la respuesta del derecho de petición Cod Lex 7894785"
14. Copia de la Resolución No 04057 del 1 de noviembre del 2022, por medio del cual nombra a la señora Gina Marcela Duarte Fonseca como jefe de oficina asesora.
15. Copia de la Resolución No 04951 del 2 de agosto del 2023, por medio del cual se nombra a la señora Sandra Viviana Alfaro Yara como Director Técnico.

### **III. PROBLEMA JURÍDICO**

Con el fin de emitir la decisión relativa a la solicitud de tutela objeto de análisis, deberá darse respuesta al siguiente problema jurídico:

¿Vulneró la UARIV los derechos fundamentales de petición, igualdad y mínimo vital, de los que es titular la señora Olga Rosa Perea Chaverra, al presuntamente no haber dado respuesta a la petición elevada el 2 de febrero del 2023?

### **IV. CONSIDERACIONES**

#### **1. Competencia.**

De conformidad con el artículo 86 Superior, el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, este Despacho es competente para conocer la presente acción constitucional.

#### **2. Del derecho de petición.**

Frente al Derecho Fundamental de Petición, cabe recordar que éste es de carácter constitucional con sustento en el artículo 23 de la Carta Política, en virtud del cual las personas tienen la facultad de elevar solicitudes respetuosas ante las autoridades y, además, a obtener pronta respuesta a ellas, por cuanto exige un pronunciamiento oportuno.

Dicho derecho, además fue regulado en la Ley 1755 de 2015, la que impone las reglas generales para presentar y contestar el derecho de petición, estableciéndose en su primer artículo "*Sustitúyase el Título II, Derecho de Petición, Capítulo I, Derecho de Petición ante las autoridades-Reglas Generales, Capítulo II Derecho de petición ante autoridades-Reglas Especiales y Capítulo III Derecho de Petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 a 33 de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011*", refiriendo entonces el artículo 13 de la normativa sustituida que:

*"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos de este código, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma respuesta".*

En el mismo compendio normativo, se dispusieron los términos que se deben tener en cuenta para resolver los derechos de petición, de la siguiente manera:

*"Art. 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

*1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.*

*2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.*

*Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto."*

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-007 de 2017, memorada en el proveído T-044 de 2019, indicó que la respuesta al derecho de petición debe cumplir con las siguientes características para que se considere que se encuentra satisfecha el derecho fundamental bajo estudio:

*"(i) Prontitud. Que se traduce en la obligación de la persona a quien se dirige la comunicación de darle contestación en el menor tiempo posible, sin que exceda los términos fijados por la Ley 1755 de 2014. En aras de fortalecer esta garantía el Legislador previó que la ausencia de respuesta puede dar lugar a "falta para el servidor público y (...) a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario."*

*(ii) Resolver de fondo la solicitud. Ello implica que es necesario que sea clara, es decir, inteligible y de fácil comprensión ciudadana; precisa*

*de modo que atienda lo solicitado y excluya información impertinente, para evitar respuestas evasivas o elusivas; congruente, o que se encuentre conforme a lo solicitado de modo que lo atienda en su totalidad; y consecuente con el trámite que la origina, cuando es el caso en que se enmarca en un proceso administrativo o una actuación en curso, caso en cual no puede concebirse como una petición aislada.*

*(iii) Notificación. No basta con la emisión de la respuesta, sino que la misma debe ser puesta en conocimiento del interesado y, ante el juez de tutela. Ello debe ser acreditado."*

Sin embargo, es necesario resaltar que la jurisprudencia constitucional es consistente en sostener que el derecho de petición no supone que la Administración deba acceder a lo pedido, como se vio en la ya citada sentencia T-044 de 2019, en la que se estudió:

*"Esta Corporación ha destacado además que la satisfacción del derecho de petición no depende, en ninguna circunstancia de la respuesta favorable a lo solicitado. De modo tal se considera que hay contestación, incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que conducen a ello. Así las cosas, se ha distinguido y diferenciado el derecho de petición del "el derecho a lo pedido", que se emplea con el fin de destacar que "el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, y en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal."*

Aunado a las anteriores consideraciones, encuentra esta Juzgadora que el derecho de petición, como los demás derechos fundamentales, cuentan con unos componentes que constituyen su núcleo esencial y otros que son denominados elementos estructurales. Los primeros, son características ontológicas de las prerrogativas constitucionales, mientras que los segundos, se erigen como factores circundantes que permiten la garantía del derecho fundamental y que guardan cercanía con el núcleo esencial. De esta forma se expuso en sentencia C-007 de 2017:

*"Este Tribunal ha precisado el entendimiento de los últimos tres requisitos en el sentido de establecer que los elementos estructurales se refieren a aquellos más cercanos a su núcleo esencial, es decir, los aspectos inherentes al ejercicio del derecho que consagren límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten dicho núcleo esencial, delimitado por la Constitución. Adicionalmente, ha definido el núcleo esencial como "como el mínimo de contenido que el legislador debe respetar, es esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades. Y, en sentido negativo debe entenderse "el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental".*

Entonces, abarcando propiamente el artículo 23 de la Constitución Política, la Corte Constitucional describió dichos aspectos en la sentencia T-058 de 2018, así:

*"Siguiendo estas consideraciones, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-951 de 2014, por medio de la cual se estudió el Proyecto de Ley Estatutaria "(p)or medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", precisó que el núcleo esencial del derecho fundamental de petición comprende: i) la formulación de la petición; ii) la pronta resolución, iii) la respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de la decisión. En concordancia, se ha precisado que sus elementos estructurales son: (i) el derecho de toda persona a presentar peticiones ante las autoridades por motivos de interés general o particular; (ii) la solicitud puede ser presentada de forma verbal o escrita; (iii) la petición debe ser formulada respetuosamente; (iv) la informalidad en la petición; (v) la prontitud en la resolución; y (vi) la competencia del Legislador para reglamentar su ejercicio ante organización privadas".*

En este punto, valga hacer énfasis acerca de la preponderancia que detenta la prueba documental que acredita el efectivo enteramiento al peticionario de la respuesta generada por la entidad pública o el particular receptor de la petición, pues sin esta no es posible perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, como lo ha manifestado la H. Corte Constitucional en sentencia T-149 de 2013:

*"La constancia que logre obtener la entidad de la notificación de su respuesta al peticionario, constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva que exige la jurisprudencia para perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, desde luego, siempre que la respuesta se ajuste a las exigencias que líneas atrás fueron desarrolladas.*

*A partir de esta reflexión, es claro que, si la entidad está obligada a tener una constancia de la comunicación con el peticionario para probar la notificación efectiva de su respuesta, con mayor razón el juez constitucional, para evaluar el respeto al núcleo esencial de tal garantía debe verificar la existencia de dicha constancia y examinar que de allí se derive el conocimiento real del administrado sobre la respuesta dada".*

### **3. Del derecho de petición en el caso de las víctimas del conflicto armado.**

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, en el caso de las peticiones presentadas por las víctimas del conflicto armado de Colombia, la H. Corte Constitucional ha impuesto una carga adicional a las entidades para resolver sus solicitudes, ya que gozan de especial protección por parte del Estado.

En la sentencia T-025 de 2004, dicha Corporación señaló que, en las respuestas dadas a las peticiones presentadas por las víctimas de desplazamiento forzado, debe tenerse en cuenta que el Estado debe garantizar el restablecimiento de sus derechos, y por ello conviene observar una serie de condiciones especiales para resolver sus solicitudes ante cualquier entidad.

Ello, no solo en la medida que la Constitución Política otorgó protección constitucional al Derecho de Petición como un medio para garantizar la consecución de los fines esenciales del estado social de derecho, sino también porque de las peticiones presentadas por las víctimas de desplazamiento forzado su entrega oportuna y adecuada se debe propender por superar el estado de cosas inconstitucional en que se encuentran.

Tales posturas, han sido reseñadas en sentencia T-377 de 2017, la cual recopila lo dicho en, entre otras, sentencias T-839 de 2006, T-630 de 2009, T-496 de 2007, T-745 de 2006 y Auto 099 de 2016 de la H. Corte Constitucional, respecto de la protección al derecho fundamental de petición en personas que han sido objeto del hecho victimizante de desplazamiento forzado.

Dentro de los requisitos que deben observarse, se enumeran los siguientes:

*"(i) Contestar una solicitud de entrega de ayuda humanitaria con la simple indicación del trámite interno que debe adelantarse para conseguirla, no puede entenderse como una respuesta válida, que satisfaga el derecho fundamental de petición. Una contestación en esos términos constituye una violación del derecho a formular peticiones.*

*(ii) Frente a solicitudes de entrega de ayuda humanitaria, las autoridades deben responder indicando una fecha cierta en el que ésta será entregada en caso de que tengan derecho a ella. En todo caso, dicha fecha debe ser razonable y oportuna.*

*(iii) Las autoridades no pueden someter a la población desplazada a un "peregrinaje institucional" para acceder a sus derechos, por lo cual es necesario que reciban de ellas una atención definitiva y directa frente a su apremiante situación. Por lo tanto, es necesario evitar por parte de las autoridades respuestas evasivas o simplemente formales.*

*(iv) Para que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar este derecho, es de "vital importancia" el adecuado manejo, registro y control de la información, con el fin de que las autoridades competentes tengan "pleno conocimiento de las solicitudes recibidas, su estado, trámite y respuesta, así como de su comunicación efectiva al desplazado" (...)"*

Bajo esos mismos criterios, la Corporación ha determinado que los anteriores requisitos van concatenados con la protección del derecho fundamental al debido proceso de una persona en víctima de desplazamiento forzado, en casos que la solicitud esté encaminada a la obtención de reconocimiento y entrega efectiva de los medios por los cuales se espera reestablecer sus

derechos, como en el caso concreto, del otorgamiento de una indemnización por su situación particular como víctima de desplazamiento forzado.

Por ello, para prevenir vulnerar, adicional al derecho fundamental de petición, el debido proceso de una persona que eleva una solicitud ante una entidad estatal, como en el caso concreto la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, se debe tener en cuenta que se pone en riesgo o vulnera también el mínimo vital:

*"(i) Cuando la entidad competente no reconoce, debiendo hacerlo, la ayuda humanitaria o la prórroga a la población desplazada que cumple con los requisitos para acceder a ella. Esta situación se presenta cuando, entre otras, las autoridades toman en cuenta requisitos, formalidad y apreciaciones que no corresponden con la situación en la que se encuentran quienes reclaman ayuda humanitaria, o cuando esas autoridades aducen formalidades o requisitos que no se encuentran en el ordenamiento jurídico.*

Así mismo, es menester señalar que la H. Corte Constitucional ha destacado la importancia de dar aplicación a las normas que regulan el procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa, como mecanismos idóneos para garantizar una adecuada ejecución de la política de reparación integral, y los principios de igualdad, gradualidad y progresividad que son aplicables a esta última. Al respecto, en la sentencia SU-034 del 2018, de forma expresa se señaló:

*...Ahora bien: allende las providencias traídas a colación por la accionante, la Sala constata que la jurisprudencia constitucional ha avalado de manera reiterada la aplicación de criterios e instrumentos de priorización y el agotamiento del procedimiento previsto por la ley dentro del esquema para la entrega de la indemnización administrativa por los hechos sufridos en el contexto del conflicto, con miras a viabilizar la adecuada reparación integral de las víctimas conforme a los principios de igualdad, gradualidad y progresividad.*

*En efecto, a través de múltiples pronunciamientos esta Corte ha reconocido que la salvaguarda de los derechos de que son titulares las víctimas, específicamente en su faceta de acceso a la indemnización por vía administrativa, está vinculada a la obligación estatal de llevar a cabo una efectiva ejecución de la política de reparación integral, la cual está sujeta a una regulación que, para avanzar en el sentido de ser plenamente operativa, incluye, entre otras cosas, la debida identificación y caracterización de las víctimas –en lo cual ellas toman parte activa–, la incorporación de un enfoque diferencial en las mecanismos y planes para resarcir los daños, y la apropiada distribución de los recursos reservados por el Estado para tal fin, atendiendo al particular estado de vulnerabilidad de los destinatarios de tales medidas.*

*Inclusive, se ha señalado que la pretermisión de estas reglas –como ocurre con el creciente recurso a la acción de tutela para obtener una orden de pago directa e inmediata al margen de los turnos– genera efectos adversos para el correcto funcionamiento del sistema de reparación, entre los que se cuentan la afectación del derecho a la igualdad de otras víctimas que aguardan por ser indemnizadas y el paralelismo de actuaciones que duplica la tarea de las autoridades encargadas y auspicia el bloqueo institucional...”*

#### **4. Actuación temeraria y cosa juzgada constitucional**

Resulta pertinente señalar, que respecto de los requisitos que deben verificarse para constatar que una persona ha incurrido en un actuar temerario, la H. Corte Constitucional, en la sentencia T-203 del 2022, precisó:

*De conformidad con lo señalado en la sentencia T-014 de 1996, un actor o su representante legal incurren en conducta temeraria cuando*

*“...promueve varias veces la acción de tutela con ocasión de unos mismos hechos, sin que exista razón valedera que la justifique.*

*Ya la ley, al exigir a quien interpone una tutela, la manifestación bajo juramento de que no ha hecho con anticipación, apoyado en los mismos hechos y razones de derecho (art. 37, inc. 2º, idem), estableció la prohibición, que en la norma siguiente desarrolla y le atribuye consecuencias.*

*Esas consecuencias a que acaba de aludir afectan al actor como a su apoderado....*

*En relación con el demandante, la temeridad puede conducir a que se rechace la demanda, cuando la situación se detecta al momento de resolver sobre su admisión, o, que el negocio se decida mediante sentencia desfavorable, cuando el proceso consiguió todo su desarrollo.*

*Para el apoderado judicial, la norma consagra una sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio profesional “al menos por dos años” o peor todavía, la cancelación de la tarjeta profesional si se establece que el abogado esta reincidiendo en su conducta temeraria”.*

*Según esa jurisprudencia son varios los requisitos que deben concurrir para que una actuación se considere temeraria:*

- 1. Que se presente una misma acción de tutela, esto es, por los mismos hechos y para reclamar el mismo derecho, en oportunidades diferentes, ya sea ante distintos jueces o ante el mismo juez;*
- 2. Que la tutela sea presentada por la misma persona o por su*

*representante; y*

3. *Que la presentación reiterada de la acción de tutela se haga sin un motivo razonable, expresamente mencionado para justificar la nueva acción...*"

Aunado a lo anterior, y en torno a la relación existente entre cosa juzgada, y actuar temerario, la H. Corte Constitucional, en sentencia T-391 de 2022, señaló:

*" La Corte Constitucional ha sostenido que la interposición simultánea o sucesiva de acciones de tutela materialmente idénticas puede conducir a la declaratoria de improcedencia de la solicitud de amparo por cosa juzgada o temeridad.*

*La cosa juzgada constitucional es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones judiciales el carácter de "inmutables, vinculantes y definitivas". Los fallos de tutela hacen tránsito a cosa juzgada una vez la Corte Constitucional decide no seleccionarlos, o en caso de que sean seleccionados, después de proferido el fallo de revisión. La Corte Constitucional ha precisado que la cosa juzgada en los trámites de tutela se configura cuando "se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia" y se constata que entre los procesos existe triple identidad de (i) partes, (ii) hechos y (iii) objeto. El principal efecto de la cosa juzgada es la imposibilidad de que el juez de tutela pueda reabrir y volver a conocer de fondo sobre una controversia que ya fue resuelta en un fallo de tutela anterior. Por lo tanto, la contratación de la existencia de este fenómeno da lugar a la declaratoria de improcedencia de la solicitud de amparo.*

*Por su parte, la "actuación temeraria" se configura cuando se presentan acciones de tutela de forma simultánea y sucesiva que comparten la triple identidad y, además, se constata "la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista". De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, no existe mala fe y, por tanto, no se configura temeridad, cuando las acciones de tutela se presentan por: (i) la falta de conocimiento del demandante, (ii) el asesoramiento errado por parte de abogados y (iii) la condición de indefensión del actor o "la necesidad extrema de defender un derecho..."*

## **5. Caso en concreto.**

Descendiendo al caso en concreto, es posible evidenciar que los hechos que suscitaron el ejercicio de la acción de tutela objeto de análisis, se encuentran relacionados con la petición radicada el 2 de febrero del 2024, correspondiente al radicado 2024-0054055-2, ante la UARIV, en el que la accionante pretende se le asigne una fecha exacta del desembolso de los recursos de la indemnización por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.

Sea lo primero indicar que, en relación a la solicitud de actuación temeraria, atendiendo a lo señalado por la UARIV, no es posible concluir que en el caso objeto de análisis, la accionante haya incurrido en un actuar temerario, pues las peticiones que suscitaron el ejercicio de la acción de tutela a las que le correspondió el radicado 11001333400520230058700, fue la referente al 24 de octubre del 2023, mientras que la que generó la presente solicitud tutelar, fue la correspondiente a la radicada el 2 de febrero del 2024.

Lo anteriormente expuesto, deja en evidencia que la acción de tutela a la que se alude carece del mismo objeto, pues se orientan a obtener una respuesta de peticiones distintas. Aunado a lo anterior, es menester señalar que el procedimiento tendiente a obtener el pago de la indemnización administrativa solicitada no ha culminado, aun cuando con las peticiones presentadas se persigan la obtención de información similar, ello no puede calificarse como un actuar inadecuado, en tanto puede presentarse la variación de las circunstancias relativas a tal trámite, cuyo conocimiento puede ser de interés de la accionante, que le permita a su juicio accionar nuevamente por esta vía.

Ahora bien, se analizará si la respuesta brindada por la UARIV a la solicitud presentada por la señora Olga Rosa Perea Chaverra, reúne las características necesarias para considerar que la misma ha garantizado el derecho fundamental de petición de la cual es titular.

En primera medida, debe advertir este despacho, que, si bien no se aportó constancia de entrega de la respuesta emitida a la accionada el 24 de febrero del 2024, lo que puede colegir que no recibió tal documental, lo cierto es, que este evento fue subsanado con la misiva notificada el 7 del marzo de la misma anualidad, tal como se evidencia en la constancia de envío dirigida al correo electrónico [PEREAOLGAROSA@GMAIL.COM](mailto:PEREAOLGAROSA@GMAIL.COM), canal de notificaciones que informó efectivamente la activa en el escrito tutelar.

Así pues, el contenido del documento al que correspondió el radicado 2024-0351819-1, se considera preciso y congruente, por cuanto en él se le pone en conocimiento a la accionante el motivo por el cual la Entidad no puede materializar la entrega de la medida de indemnización administrativa ni suministrar una fecha cierta, argumentado que mediante Resolución N°. 04102019-172743 del 21 de diciembre de 2019, se le reconoció la indemnización por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, empero, al dar aplicación al Método Técnico de Priorización, le manifestó que el resultado no había sido favorable, por lo tanto, no se podía generar el desembolso en la vigencia correspondiente al 2023.

En atención a ello, comunicó: *"Teniendo en cuenta que en el presente no fue procedente acceder a la indemnización administrativa en la vigencia 2023, la Unidad procederá a aplicarle el Método Técnico de Priorización en el transcurso del 2024, aclarando que, en ningún caso, el resultado obtenido en una vigencia será acumulado para la siguiente."*

Bajo esos términos, es pertinente mencionar que, la respuesta emitida del derecho de petición no necesariamente debe ser positiva y accediendo a lo

pretendido, sino que debe atender los puntos a los que se refiere la misma y exponer las razones por las cuales se accede o no a lo solicitado. En relación a tal asunto, la H. Corte Constitucional en, entre otras, la sentencia T-357 de 2018, señaló:

*"...Al respecto, es preciso recordar que de acuerdo con la propia jurisprudencia constitucional el derecho de petición "(...) no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante", así, se entiende que el mismo no se ha visto conculcado cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa. Esto quiere decir que, conforme lo ha reiterado la Corte Constitucional en varios pronunciamientos "(...) la respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita".*

Por consiguiente, resulta posible concluir que la respuesta brindada a la gestora puede ser calificada como de fondo, congruente, consecuente y clara, en cuanto refiere las razones por las cuales no es posible determinar una fecha precisa en la que se efectuará la entrega de la indemnización administrativa deprecada. Así las cosas, se colige que la entidad resolvió la solicitud formulada, ya que contestó de fondo, aunque de manera negativa lo pretendido, y que como consta en la copia del envío del correo electrónico del 7 de marzo del 2024, fue debidamente notificado al correo electrónico informado en la petición misma.

Respecto del término de respuesta, debe recordarse que como lo dispone la Ley 1755 de 2015, el plazo para emitir pronunciamiento alguno sobre la solicitud elevada, era de 15 días, que, si bien en el presente asunto se superaron, este fue superado con la misiva notificada el 7 de marzo del 2024.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha reiterado que cuando la vulneración o la amenaza de los derechos cuya protección se reclama cesan, se presenta lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado "hecho superado", tal y como la Corte lo reiteró en sentencia T-297 de 2019:

*"Sobre el particular, la Corte Constitucional, en numerosas providencias, ha interpretado la disposición precitada en el sentido de que la carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar cuando desaparece la vulneración o amenaza al derecho fundamental invocado.*

*En tal sentido esta Corporación ha señalado los criterios que deben verificarse a fin de examinar y establecer la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado desde el punto de vista fáctico. Estos criterios son los siguientes:*

*"1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.*

2. *Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.*
1. *Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado”.*

En consecuencia, se negará el amparo pretendido ante la carencia actual de objeto por hecho superado.

Finalmente, frente a los derechos fundamentales a la igualdad y al mínimo vital, es pertinente recalcar que, debe haber algún soporte probatorio de cara a su exigibilidad, como quiera que, si bien la tutela goza de informalidad para su trámite, no es menos cierto que el Juez Constitucional tiene el deber de soportar su decisión en el acervo probatorio y no en las simples afirmaciones. Tal supuesto, impone una carga en cabeza del tutelante, como lo ha expuesto la sentencia T-571 de 2015:

*"un juez no puede conceder una tutela si en el respectivo proceso no existe prueba, al menos sumaria, de la violación concreta de un derecho fundamental, pues el objetivo de la acción constitucional es garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, cuya trasgresión o amenaza opone la intervención del juez dentro de un procedimiento preferente y sumario." Así las cosas, los hechos afirmados por el accionante en el trámite de una acción de tutela, deben ser probados siquiera sumariamente, a fin de que el juez pueda inferir con plena certeza la verdad material que subyace con la solicitud de amparo constitucional.*

*Por otra parte, la Corte en Sentencia T-131 de 2007 se pronunció sobre el tema de la carga de la prueba en sede de tutela, afirmando el principio "onus probandi incumbit actori" que rige en esta materia, y según el cual, la carga de la prueba incumbe al actor. Así, quien pretenda el amparo de un derecho fundamental debe demostrar los hechos en que se funda su pretensión, a fin de que la determinación del juez obedezca a la certeza y convicción de que se ha violado o amenazado el derecho”.*

Por consiguiente, no se impartirá ninguna orden frente a estas pretensiones, como quiera que la UARIV obró en aplicación del ordenamiento jurídico, y adicionalmente, tampoco se enunció o demostró una situación de debilidad o urgencia manifiesta que sustente el eventual amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y al mínimo vital.

## V. DECISIÓN

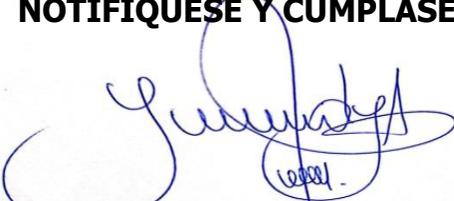
En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

- PRIMERO:** **DECLARAR IMPROCEDENTE** de la acción de tutela presentada por la señora Olga Rosa Perea Chaverra, respecto del derecho fundamental de petición, en tanto se ha configurado la carencia actual de objeto por hecho superado.
- SEGUNDO:** **NEGAR EL AMPARO** de los derechos fundamentales a la igualdad y al mínimo vital, por las razones aquí expuestas.
- TERCERO:** **NOTIFICAR** la presente providencia a las partes a través de correo electrónico.
- CUARTO:** **ENVIAR** el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, si en el término de ejecutoria esta decisión no es impugnada.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

La Juez,

  
**YUDY ALEXANDRA CHARRY SALAS**

NRAR